

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 21° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-8765-2021  
CARATULADO : GARRIDO/SÁNCHEZ

Santiago, treinta de Diciembre de dos mil veintidós

VISTO:

A folio 1, comparece **ANA VERONICA GARRIDO CANCINO**, técnico en enfermería, domiciliada en Pasaje Santa Lucía N°6739, La Granja, quien viene en interponer demanda en juicio ordinario de mayor cuantía de indemnización de perjuicios en contra de **ESTEBAN ALEJANDRO SANCHEZ CHACON**, ingeniero, domiciliado en calle Los Talaveras N°300, departamento 203 C, Ñuñoa.

Funda su pretensión en que, con fecha 17 de agosto de 2020, aproximadamente a las 21:30 horas, conducía el furgón placa patente DBHV.88 por calle La Granja en dirección al norte. Afirma que al cruzar la intersección con calle Argentina, su vehículo fue colisionado violentamente en toda el costado trasero izquierdo por el automóvil placa patente JWDV.86, conducido por el demandado, quien transitaba a velocidad excesiva, sin respetar el signo pare y sin ceder el derecho preferente de paso que correspondía a su vehículo, agregando que conducía el vehículo con el permiso de circulación y revisión técnica homologación de gases vencidos. Como consecuencia del impacto recibido, manifiesta que su vehículo se estrelló contra un árbol, resultando con lesiones graves, consistentes en fractura de clavícula izquierda, contusiones múltiples, siendo trasladada de urgencia hasta el Hospital Padre Hurtado, para luego ser intervenida en el Hospital de la Asociación Chilena de Seguridad, conjuntamente con someterse a sesiones de kinesiología, añadiendo que ha debido ser atendida y encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico por el Centro de Terapia del Comportamiento.

Afirma que los hechos descritos se ventilaron ante la causa RUC 2000880630-7 de la Fiscalía Región Metropolitana Sur y la causa RIT



1972-2021 del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, donde el demandado fue formalizado como autor de cuasidelito de lesiones graves y se le impuso la suspensión condicional del procedimiento, resolución que se encuentra ejecutoriada, debiendo cumplir con diversas medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 238 del Código Procesal Penal.

Sostiene, a la luz de lo indicado previamente, que el conductor demandado es el culpable del accidente de tránsito fundante de esta acción y su conducción antirreglamentaria e ilícita es la causal basal del siniestro en comento, y su actuar infraccional es la consecuencia inmediata y necesaria de los daños y perjuicios que se le ocasionaron, de conformidad con lo dispuesto en el citado inciso segundo del artículo 169 de la Ley N°18.290, en relación con lo previsto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

En cuanto a los perjuicios, los avalúa en la suma de \$59.903.000.-.

Tratándose del daño emergente, lo valoriza en la suma de \$9.903.000.-, donde \$5.000.000.- corresponden al daño emergente por las graves lesiones que habría padecido, debiendo someterse a intervenciones quirúrgicas y controles médicos, kinesiológicos, entre otros. Dentro del mismo rubro, solicita la suma de \$4.403.000.- por los daños que experimentó el furgón placa patente DBHV.88, agregando el monto de \$500.000.- por la desvalorización comercial del vehículo.

Respecto al daño moral, y conjuntamente con definirlo en base a la doctrina, señala que el accidente ha afectado su psiquis en lo emocional y afectivo, más aún cuando he quedado con secuelas permanentes y caído en estados depresivos, de angustia, de insomnios, de falta de concentración, alteraciones nerviosas, de falta de motivación, se ha aislado socialmente, ya que evita reunirse con amigos y toda actividad social, lo cual ha sido constatado por la médico Carolina Andrea Labbé Cid, del Centro de Terapia de Comportamiento. En razón de ello, solicita la suma de \$50.000.000.-

Previas citas legales, pide tener por deducida demanda en juicio ordinario de mayor cuantía de indemnización de perjuicios en contra del demandado ya individualizado, y, en definitiva, acogerla, condenando a dicho demandado a pagarle la suma de \$59.903.000.-, o la que el Tribunal



estime de justicia, atendido el mérito del proceso, con más reajustes e intereses, con costas.

**A folio 10**, consta notificación personal subsidiaria del demandado.

**A folio 15**, el demandado contesta la demanda, pidiendo el rechazo de esta con costas. Argumenta que el hecho que sido formalizado en causa penal, no implica determinación de su culpabilidad, de modo que, es carga de la contraparte acreditar esa circunstancia. Asimismo, la suspensión condicional del procedimiento a que alude, tampoco implica reconocimiento alguno de responsabilidad, por lo que niega que su conducta sea la causa basal del accidente.

En cuanto a las prestaciones solicitadas, pide su rechazo, afirmando que el hecho que haya sido atendida por el Hospital de la ACHS da a entender que el accidente fue calificado como de trayecto o laboral, por lo que no desembolsó gasto alguno, lo cual la inhibe de ser indemnizada por tal concepto.

Respecto a los daños del automóvil, hace presente que debió contar con el seguro obligatorio, agregando que la demandante vendió el referido vehículo el 16 de agosto del 2021, un año después del accidente, sin que tampoco entregue antecedentes de como arribó a la suma de \$500.000.- como desvalorización del mismo vehículo, esgrimiendo la falta de legitimación activa por lo antes enunciado.

Finalmente, en cuanto al daño moral, luego de referir ciertas consideraciones doctrinarias sobre su concepto y características, afirma que este debe ser probado, ya que no existe en nuestra legislación norma alguna que lo presuma ni lo excluya del deber de probarse, acotando que este debe compensarse con una suma razonable y prudente para lograr la finalidad de la indemnización, que no es la sanción ni el lucro.

Hace presente que el demandado estuvo presente en todo momento cuando acaeció el accidente, y que proceso RUC 2000880630-7 de la Fiscalía Región Metropolitana Sur y la causa RIT 1972-2021 del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, en audiencia de fecha 26 de octubre de 2021, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 letra e) del Código Procesal Penal, se entregó a la demandante la suma de \$1.000.000, que fue aceptado por ella.



**A folio 17 y 19,** se evacuaron los trámites de la réplica y dúplica.

**A folio 24,** llamadas las partes a conciliación esta no se produjo.

**A folio 26,** se recibió la causa a prueba.

**A folio 55,** se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, **ANA VERONICA GARRIDO CANCINO**, interpone demanda en juicio ordinario de mayor cuantía de indemnización de perjuicios en contra de **ESTEBAN ALEJANDRO SANCHEZ CHACON**, conforme se señaló en la parte expositiva de la presente sentencia.

**SEGUNDO:** Que, legalmente emplazada, la parte demandada pidió el rechazo de la demanda.

**TERCERO:** Que, la parte demandante rindió la siguiente prueba:

**Documental:**

**A folio 34:**

1.- Epicrisis emitida por la Asociación Chilena de Seguridad, con diagnóstico de Ana Verónica Garrido Cancino, de fractura clavícula, diafisaria cerrada, con resumen de hospitalización, exámenes relevantes, procedimientos relevantes, medicamentos administrados e indicaciones, de fecha 31 de agosto del 2020.

2.- Certificado de atención de emergencia, otorgado por el Hospital Padre Hurtado, de fecha 17 de agosto del 2020.

3.- Protocolo operatorio, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, en el que consta que la demandante fue intervenida quirúrgicamente el día 31 de agosto de 2020.

**A folio 35:**

1.- Informe emitido por la psiquiatra Carolina Labbé Cid, con fecha 28 de septiembre del 2021.

**A folio 39:**

1.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes, en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil, correspondiente al vehículo placa patente DBHV.88-4.



2.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes, en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil, correspondiente al vehículo placa patente JWDV.86-9.

3.- Set de cinco fotografías, autorizadas en la Notaría de Santiago de Eduardo Roco Campos, respecto al vehículo placa patente DBHV.88-4.

4.- Set de cinco fotografías.

5.- Certificado emitido por Derco Center S.A., de fecha 17 de febrero de 2021, respecto del furgón placa patente DBHV.88.

**A folio 40:**

1.- Documento titulado “Informe técnico pericial estructural mecánico” emitido por Dante Bandelli Agostini.

**A folio 41:**

1.- Parte detención de fecha 18 de agosto del 2020 respecto al demandado.

**A folio 44:**

1.- Comprobante de pago, de fecha 28 de agosto de 2020, emitido por el Hospital del Trabajador, por la suma de \$921.776.- y boleta de ventas y servicios N°337039, de fecha 7 de septiembre de 2020.

2.- Comprobante de pago, de fecha 24 de septiembre de 2020, emitido por el Hospital del Trabajador, por la suma de \$2.548.880.- y boleta electrónica N°87472, de fecha 24 de septiembre de 2020.

3.- Receta médica, de fecha 26 de agosto de 2020, emitida por la médico María Rosario Pulido Urzúa, médico cirujano, con receta médica y su respectiva boleta de compra, de esa misma fecha, por la suma de \$7.590.-

4.- Receta médica, de fecha 17 de septiembre de 2020, emitida por el médico Nicolás Morán Córdova del Hospital del Trabajador, con receta médica y su respectiva boleta de compra, de 26 de septiembre de 2020, por la suma de \$9.435.-

5.- Receta médica, de fecha 24 de septiembre de 2020, emitida por el médico antes nombrado, con receta médica y su respectiva boleta de compra, de 26 de septiembre de 2020, por la suma de \$15.149.-



6.- Boleta electrónica N°332756, de 11 de febrero de 2021, emitida por Carolina Labbé Cid, del Centro de Terapia del Comportamiento, correspondiente a consulta psiquiátrica, por la suma de \$38.000.-

7.- Receta médica, de fecha 15 de febrero de 2021, de Carolina Labbé Cid, psiquiatría adultos, del Centro de Terapia del Comportamiento, correspondiente a receta médica y la respectiva boleta electrónica de compra, de fecha 23 de febrero de 2021, por la suma de \$6.750.-

8.- Set de 15 bonos de atención de ambulatoria, emitidos por el Fondo Nacional de Salud, por un total de \$139.105.-

9.- Presupuesto estimado de hospitalización, de fecha 27 de agosto de 2020, emitido por el Hospital del Trabajador.

**Testimonial:**

**A folio 46,** comparecen Dante Bandelli Agostini, Lilian Gaete Acevedo y Sonia Domínguez Muñoz, quienes previamente juramentados, legalmente examinados y sin tacha, deponen al tenor de los puntos de prueba respecto a los cuales son presentados.

**Oficios:**

**A folio 52,** oficio remitido por la ACHS, que contiene ingreso médico, control médico e informe imagenológico de la demandante Ana Garrido Cancino.

**A folio 53,** oficio remitido por el Hospital Padre Hurtado, de fecha 12 de octubre del 2022, que remite hoja de vida y contrato de trabajo de la demandante.

**CUARTO:** Que, la parte demandada rindió la siguiente prueba:

**Documental:**

**A folio 38:**

1.- Piezas del expediente RUC N°2000880630-7, RIT N°1972-2021, del 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

2.- Impresión de la página web de la Asociación Chilena de Seguridad, en donde se indica ¿Qué hacer en caso de accidentes como trabajador?

3.- Impresión de la página web de la Asociación Chilena de Seguridad, Marco regulatorio Ley 16.744.



4.- Impresión de la página web de la Asociación Chilena de Seguridad, “Conoce sobre la Ley”

5.- Documento denominado “Preguntas frecuentes” de la Asociación Chilena de Seguridad.

6.- Copia del Decreto N°101 que aprueba el reglamento para la aplicación de la ley N°16.744.

7.- Copia del Decreto N°109, del Ministerio del Trabajo y Previsión social, que aprueba el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

8.- Documento obtenido de Transparencia Activa del Hospital Padre Hurtado, personal y remuneraciones, en que consta el cargo que ejerce la demandante.

9.- Documento obtenido de Transparencia Activa del Hospital Padre Hurtado, personal y remuneraciones, en que consta el cargo que ejerció en el 2021 la demandante.

10.- Impresión de la página web Chile Autos, en donde se vende un furgón Changan S300 por la suma de \$2.700.000, otro por \$2.800.000.

**QUINTO:** Que, del análisis de la demanda se advierte que la actora encuadró su acción dentro de las reglas que rigen la indemnización de perjuicios en sede extracontractual, sin recurrir a los procedimientos destinados a perseguir la responsabilidad del conductor sancionado en sede infraccional o penal, a través de los respectivos procedimientos sumarios dispuestos al efecto, según los artículos 9 de la Ley N°18.287 y 680 N°10 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente.

Lo anterior es relevante, puesto que habiendo hecho uso de tales procedimientos, la actividad probatoria reviste menor complejidad, ya que existirá sentencia pronunciada en dichas sedes que habrán determinado la responsabilidad del infractor en lo tocante a la efectividad y participación del demandado en el accidente de tránsito. Dicha situación no acontece en autos, ya que al recurrir a las reglas generales deberá acreditarse de forma fehaciente la ocurrencia del accidente, la responsabilidad del demandado y las consecuencias perniciosas derivadas de tal hecho.

**SEXTO:** Que, para dilucidar la procedencia de la acción y analizar la concurrencia de los requisitos que harían procedente la indemnización de



perjuicios solicitada, se torna necesario determinar la ocurrencia del accidente de tránsito y la responsabilidad que le asiste a la parte demandada, en los términos en que fuere planteado en la demanda.

**SÉPTIMO:** Que, a dicho respecto, se aprecia que la parte demandante aportó el parte de detención de folio 41 y el demandado allegó piezas del expediente RUC N°2000880630-7, RIT N°1972-2021, del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, a folio 38. En estos últimos documentos, se aprecia que con fecha 26 de octubre del 2021, el Tribunal decretó la suspensión condicional del procedimiento por el término de 1 año, ordenando al demandado fijar domicilio e informar al Ministerio Público de cualquier cambio del mismo y efectuar el pago a la víctima a título de indemnización la suma de \$1.000.000.- A ello el demandado se allanó, y existe constancia del pago de dicha suma en los mismos autos, los cuales son valorados conforme a su naturaleza de instrumento público.

Respecto a la suspensión aludida, la doctrina imperante sostiene que no supone la aceptación de los hechos, señalándose que *“La particularidad de esta salida consiste en que lo que se suspende es el proceso mismo, sin requerir declaración de culpabilidad del imputado”* (Cristian Maturana Miquel y Raúl Montero López. Derecho procesal Penal, Tomo II. Abeledo y Perrot Legal Publishing, Santiago, 2010, pág. 627) Sin embargo, si tales hechos logren o no configurar un ilícito penal, ello no implica que no sean considerados por este Tribunal como circunstancias que acarreen un daño civil.

En efecto, del análisis del escrito de contestación, tenemos que el argumento defensivo de la parte demandada consiste principalmente en negar de forma genérica los hechos de la demanda, para luego en forma sucinta expresar que la formalización y posterior suspensión condicional del procedimiento no implica que haya reconocido su responsabilidad en los hechos, destinando la mayor parte de su contestación a refutar los daños cuyo resarcimiento requiere la actora, agregando que siempre se mantuvo en el lugar de los hechos y asistió a la demandante. Ello debe contrastarse con las declaraciones vertidas en el parte de detención, particularmente la declaración voluntaria de víctima en página 18, por cuanto el demandado con fecha 17 de agosto del 2020 declara, entre otras cosas *“Que el día*





*lunes 17 de agosto del año 2020, siendo las 21:30 hrs., en circunstancias que conducía mi vehículo particular tipo automóvil marca Mazda (...) PPU JWDV-86, por calle La Granja en dirección al norte, momento en que en la intersección con la calle Brasil se me cruza un vehículo color rojo del cual desconozco mayores antecedentes (dicho vehículo comienza a seguirme (...) siendo perseguido (...) en todo momento aumentando su velocidad realizando otro giro a la derecha por calle Argentina y al llegar a la intersección con calle La Granja no respetando la señalización (ilegible) existente en el lugar colisionando un vehículo, tipo furgón, color blanco (...))”*

De tal forma, dicha declaración de parte del demandado –valorada conforme a su naturaleza de instrumento privado no objetado– permite tener por establecida su responsabilidad en el accidente automovilístico que sirve de base a la pretensión de la demandante, y que el vehículo que conducía era de su propiedad, mediante documento de folio 39 consistente en certificado de inscripción y anotaciones vigente, haciendo presente nuevamente que lo analizado en autos son las consecuencias civiles de un hecho del cual es autor la parte demandada, según queda comprobado a raíz de su propia declaración al momento de tener lugar dichos hechos.

**OCTAVO:** Que, de tal forma, corresponde analizar los presupuestos de la responsabilidad extracontractual cuyo resarcimiento persigue la demandante, los cuales son la existencia de una acción u omisión, que este haya sido cometido con dolo o culpa, el daño, el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, y la capacidad delictual.

**NOVENO:** Que, respecto a la acción del actor, tenemos por acreditado dicho requisito en base a lo referido en el considerando séptimo al cual nos remitimos.

**DÉCIMO:** Que, en cuanto a la culpa o dolo del actor, se estima en base a los hechos acreditados que concurre culpa en su actuar. Igualmente, siendo el conductor demandado mayor de edad, se presumirá su plena capacidad delictual.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, en cuanto a los daños demandados por la actora, tenemos que estos ascienden a la suma de \$59.903.000.-, donde el



daño emergente corresponde a un monto de \$9.903.000.- y el daño moral a un total de \$50.000.000.-

Dentro del daño emergente, contempla la suma de \$5.000.000.- por concepto de gastos médicos, y \$4.903.000.- por gastos respecto al vehículo que manejaba al momento de producirse el accidente.

En cuanto al primer ítem, estos quedan acreditados en cuanto a su ocurrencia mediante la epicrisis de folio 34 de 31 de agosto del 2020, y el oficio de folio 52, remitido por la ACHS, el cual da cuenta de la osteosíntesis de la fractura de clavícula experimentada por la demandante. Ello, ligado a los documentos de folio 44, consistentes en gastos médicos, boletas por compras de medicamentos, y consultas psiquiátricas, son analizadas en su conjunto y permiten tener por acreditado o presumir –en el caso de los medicamentos y la consulta médica aludida– que estos dicen relación con el accidente sub lite, y que en su conjunto arrojan un total de \$3.686.685.-, lo cual será concedido a la demandante a título de daño emergente. Se deja constancia que tales documentos son valorados conforme a su naturaleza de instrumentos privados.

Ahora, respecto a los daños experimentados por el vehículo, si bien en el parte de detención en su página 6 se señala que la demandante tiene tomada una póliza con BCI Seguros, N°59562314, no se produjo prueba en orden a determinar si dicho seguro operó y en qué grado, por lo que habrá de estarse a la prueba que efectivamente se rindió en autos al respecto. En dicho sentido, tenemos que a folio 39, se acompañó certificado emitido por Dercocenter S.A., con fecha 17 de febrero del 2021, quien afirma que el vehículo no está apto para presentar un presupuesto de reparación dada la magnitud del daño, y a folio 40, se acompañó el denominado “informe técnico pericial estructural mecánico” emitido por Dante Banadelli Agostini, documento reconocido por su autor a folio 46. Si bien dicho instrumento es presentado como un informe pericial, debe advertirse desde ya que tal prueba no fue emitida conforme a las reglas de los artículos 409 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por lo que no es dable valorarla como tal, sin perjuicio de reconocerle valor como instrumento privado no objetado. En tal sentido, dicho documento nos señala que el total de las reparaciones del vehículo costarían la suma de \$4.403.000.- sin perjuicio de



afirmar en audiencia testimonial de folio 46 que en su opinión cree “*que no hay ningún taller que lo pueda reparar por su alto costo*”. Ello es concordante con el certificado emitido por Dercocenter referido anteriormente, por lo que nos encontraríamos frente a una hipótesis de pérdida total del vehículo, atendido el elevado gasto que supondría su reparación. Sin perjuicio de lo enunciado, tenemos que la única información referencial respecto al valor del vehículo y el eventual costo de reparación es dicho instrumento, el cual no fue objetado por la parte demandada. En razón de ello, ante la carencia de otros medios probatorios de orden técnico que permitan acceder al monto total que demanda la actora por dicho concepto, y a lo solicitado por la desvalorización del automóvil, se evaluará prudencialmente el daño experimentado por el mismo en la suma de \$2.000.000.-

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, en cuanto al daño moral reclamado, nuestra Corte Suprema ha indicado que “*Que si bien es necesario probar el daño moral, no debe olvidarse que uno de los medios de prueba que contempla la legislación son las presunciones judiciales o indicios, es decir, deducir un hecho incierto de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas*” (Rol N°7157-2011)

Por la naturaleza misma del daño moral este es de difícil prueba, por lo que teniendo establecido el hecho dañoso y el daño emergente padecido por la demandante, este se puede presumir fundadamente en base a su ocurrencia, ya que las dolencias físicas y la pérdida de bienes materiales ha producido sin lugar a dudas una perturbación anímica en la demandante, lo cual se ve corroborado por el documento acompañado a folio 35, emitido por la psiquiatra Carolina Labbé Cid, quien establece que “*se evalúan estresores de su actual gatillante paciente relata accidente automovilístico en agosto del 2020 tras el cual evolucionó con síntomas de estrés postraumático angustia ansiedad sin poder retomar el auto, sueño y flash back del choque. Se ajustan fármacos y se realizan intervenciones con foco en estresores con lenta respuesta pero favorable logrando en julio de este año volver a manejar pero aun con mucho miedo al tomar calles grandes. Trastorno afectivo bipolar, Trastorno estrés postraumático recuperado*” Si bien el documento afirma que el último trastorno se encuentra recuperado,



ello no implica que la demandante no haya experimentado una perturbación emocional en forma previa, lo cual queda demostrado mediante la testimonial de folio 46, por cuanto Lilian Gaete Acevedo y Sonia Domínguez Muñoz se muestran contestes en el hecho de las consecuencias anímicas que produjo el accidente, refiriendo que ella se aisló y que adquirió miedo a manejar su automóvil por la experiencia vivida. Dicho testimonio se valora conforme a la regla del artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil.

Si bien existe constancia y prueba suficiente de la ocurrencia del daño moral, lo cierto es que la prueba rendida es insuficiente para conceder la cuantía solicitada por la demandante, lo cual no impide que este Tribunal proceda a avaluar prudencialmente su cuantía, por lo cual la fija en la suma de \$20.000.000.-

**DÉCIMO TERCERO:** Que, habiéndose acreditado el daño, se puede tener por establecido el nexo causal, entre el hecho del autor y aquel, ya que suprimido metal e hipotéticamente el atropello, desaparecen las consecuencias perniciosas de este.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, atendido que la reparación del daño debe ser integral, se concederán las sumas antes expresadas con reajustes e intereses, computándose los primeros por la variación experimentada por el IPC entre la fecha de la notificación de la demanda hasta la de su pago efectivo, y los últimos devengándose en igual período.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, las demás prueba rendida, descrita más no valorada en particular en nada altera lo decidido. Igual suerte corren las alegaciones de la demandada, relativas a la presunta falta de legitimación activa de la demandante, la cual no fue acreditada, en razón de no haberse rendido prueba al respecto.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, las costas serán de cargo de la parte demandada, al haber resultado vencida.

**Y VISTO,** lo dispuesto en los artículos 1437, 1438, 1445, 1698 y siguientes, 2314, 2332 del Código Civil, artículos 144, 160, 170, 341, 342, 346 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que, **SE ACOGE** la demanda, condenándose a la parte demandada al pago de la suma de \$5.686.685.- (cinco millones seiscientos



C-8765-2021

ochenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco pesos) por daño emergente, y a la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos) por concepto de daño moral, sumas que deberán pagarse con los respectivos reajustes e intereses en la forma fijada en el considerando décimo cuarto.

II.- Que, **SE CONDENA** en costas a la parte demandada.

Regístrese y notifíquese, y archívese en su oportunidad.

C-8765-2021

Dictada por **doña PATRICIA ILSE CASTRO PARDO, Juez Titular**. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta de Diciembre de dos mil veintidós**

